



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ejecutivo Laboral
Radicación:	05266-31-05-001-2016-00622-01
Ejecutante:	Protección S.A.
Demandado:	Claudia Patricia Ramírez Castellanos
Asunto:	Apelación auto que resuelve excepciones
Procedencia:	Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Tema:	Excepción de inexistencia de título ejecutivo

**Medellín, agosto cuatro (04) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad ejecutante, contra el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, en audiencia pública celebrada el 13 de julio de 2023, por medio del cual ordenó cesar la ejecución, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. en contra de la señora CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ CASTELLANOS. Radicado 05266310500120160062201.

**1.- ANTECEDENTES**

La Administradora de Pensiones y Cesantías Protección S.A., por conducto de su representante legal y a través de apoderado judicial, promovió demanda ejecutiva laboral en contra de la señora Claudia Patricia Ramírez Castellanos, pretendiendo se libre mandamiento ejecutivo por la suma de \$49.924.605, de los cuales, \$15.657.305 corresponden a capital de la obligación a cargo del empleador por el no pago de los aportes en pensión obligatoria y fondo de solidaridad y la suma de \$34.267.300 por concepto de intereses de mora causados desde la fecha límite establecida para el pago de los aportes hasta octubre de 2016, más los intereses de mora que se causen a partir de la fecha de expedición del título ejecutivo.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, mediante auto proferido el 28 de noviembre de 2016, libró mandamiento de pago a favor de Protección S.A. y contra la señora Claudia Patricia Ramírez Castellanos, en la forma pretendido, esto es, por la suma de \$15.567.305, por concepto de capital y por la suma de \$34.267.300, por concepto de interés de mora.

Ante la imposibilidad de lograr la comparecencia de la señora Claudia Patricia Ramírez Castellanos, le fue designado curador ad litem, quien, al dar respuesta a la demanda ejecutiva, formuló las excepciones de prescripción y caducidad de la acción y carencia de prueba que demuestre la existencia de la obligación.

### **1.1.- DECISIÓN DE EXCEPCIONES**

En audiencia pública celebrada el 13 de julio de 2023, el Juzgado de conocimiento, resolvió cesar la ejecución dentro del proceso ejecutivo de la referencia, por inexistencia del título, condenó en costas a la parte ejecutante, fijando como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 y ordenó el archivo del proceso.

## **1.2.- RECURSO**

### **Protección S.A.**

El apoderado de la entidad ejecutante interpuso el recurso de apelación, señalando que los aportes para pensión son un elemento fundamental para la consolidación del derecho y sin estos, no sería posible su conformación, razón por la cual la falta de los aportes podría afectar los derechos pensionales de los afiliados.

Considera que el material probatorio no está siendo debidamente valorado por el a quo, pues las afiliaciones de los trabajadores son muy anteriores a la formulación de la demanda, es muy posible y de eso no se tiene certeza, que se haya presentado un cambio de ubicación y que, por lo tanto, la accionada ya no hubiera estado radicada en el Departamento del Quindío, sino en la dirección a la que se envió el requerimiento por parte de la administradora demandante, pues no se tenía forma de establecer la dirección, la persona no tenía registro mercantil y solamente se contaba con la información que se extraía de lo que ella reportaba a la administradora de pensiones.

Resaltó que la afiliación de uno trabajadores que laboraba en un asadero y respecto al cual se afirma en la providencia que es inexistente la obligación por no existir afiliación, se produce una única vez, independientemente del empleador que lo haga, de ahí que cuando la persona ingresa a un nuevo trabajo, lo único que empiezan a hacer es a cotizarle ahí, bajo un empleador diferente y no se requiere de una nueva afiliación.

## **1.3.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para formular alegatos se pronunció el apoderado de la entidad ejecutante, señalando que no existen argumentos suficientes dentro de la primera instancia para declarar la inexistencia de la obligación del pago de aportes y si bien se puede apreciar una dirección en el Quindío, lo cierto es que ante la entidad obra la dirección a la cual se remitió el requerimiento y es en la ciudad de Medellín, siendo allí donde se remite el requerimiento de constitución en mora previo a la elaboración del documento que presta mérito ejecutivo.

## **2.- CONSIDERACIONES**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **apelación**, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66 A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

### **2.1.- PROBLEMAS JURÍDICOS:**

Los problemas jurídicos a dirimir, radican en determinar

¿Si es procedente revocar el auto por medio del cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, ordenó cesar la ejecución y dispuso el archivo del proceso, para en su lugar, ordenar continuar la ejecución en los términos del mandamiento de pago proferido el 28 de noviembre de 2016?

### **2.2.- TESIS**

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual, Protección S.A., no acreditó la notificación efectiva del requerimiento fechado del 30 de agosto de 2016 a la señora Claudia Patricia Ramírez Castellanos,

razón por la cual no puede tenerse por cumplido los presupuestos del artículo 5° del Decreto 2633 de 1994, para iniciar la acción ejecutiva, y, en igual medida, no se acreditó que se hubieran hecho al empleador los requerimientos de que trata la Resolución 2082 de 2016, en consecuencia, debe CONFIRMARSE el auto apelado, atendiendo a las siguientes:

### **2.3.- PREMISAS NORMATIVAS**

#### ***Naturaleza del proceso ejecutivo laboral***

Se precisa, que el proceso ejecutivo laboral es la vía procesal a través de la cual el trabajador, afiliado u acreedor, busca el cumplimiento coactivo de una obligación, clara, expresa y exigible, que tiene su fuente en una relación de trabajo, contenida en un documento, privado o público, o en una sentencia judicial.

El artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, regula la procedencia de la ejecución, en los estos términos:

*“Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.*

*Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”.*

En esta misma perspectiva el artículo 422 del código General del Proceso, señala:

*“La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:*

*1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas. (...).”*

En relación con la solicitud de ejecución de aportes pensionales adeudados al sistema por parte de los empleadores, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, preceptúa:

*“ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.”*

A su vez, el artículo 5° del Decreto 2633 de 1994, establece:

*“Del cobro por vía ordinaria. En desarrollo del artículo 24 de la ley 100 de 1993, las demás entidades del régimen solidario de régimen de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e intereses moratorios, con sujeción a lo previsto en el Art. 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, **se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el Art. 24 de la Ley 100 de 1993**”. (Negrilla fuera de texto).*

Así pues, el título ejecutivo para el cobro de aportes obligatorios de pensiones, estará constituido, de una parte, por la liquidación efectuada por el Fondo al

empleador en mora y por otra, por la prueba de la realización del requerimiento al empleador moroso, debiendo existir coincidencia en ambos documentos respecto a los montos y períodos en mora, sin perjuicio de los demás valores que se causen en el trámite del proceso de ejecución.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que, aunque la UGPP cuando lo considere conveniente puede adelantar las acciones de cobro de las contribuciones parafiscales, las administradoras pensionales son las competentes, en principio, para adelantar tales acciones respecto a la mora registrada de sus afiliados, conforme lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, disposición que en su párrafo primero establece:

***“PARÁGRAFO 1o.*** Las administradoras del Sistema de la Protección Social continuarán adelantando las acciones de cobro de la mora registrada de sus afiliados, para tal efecto las administradoras estarán obligadas a aplicar los estándares de procesos que fije la UGPP. La UGPP conserva la facultad de adelantar el cobro sobre aquellos casos que considere conveniente adelantarlos directamente y de forma preferente, sin que esto implique que las administradoras se eximan de las responsabilidades fijadas legalmente por la omisión en el cobro de los aportes”.

Bajo tal entendimiento, debe tenerse presente que, para la constitución del título ejecutivo, las administradoras de fondos de pensiones obligatoriamente, deben cumplir con los requerimientos y acciones persuasivas al empleador que presuntamente se encuentra en mora, efectuando como mínimo dos requerimientos a dicho empleador, tal y como se dispone el artículo 12 de la Resolución 2082 de 2016, el cual establece:

***“ACCIONES PERSUASIVAS.*** Una vez las Administradoras constituyan el título que presta mérito ejecutivo, deben contactar al deudor como mínimo dos veces. El primer contacto lo deben realizar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la constitución 1 firmeza del título ejecutivo, según el caso, y el segundo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se realizó el

*primer contacto, sin superar cuarenta y cinco (45) días calendario, de conformidad con los criterios que se definen en el Anexo Técnico Capítulo 3”.*

Cabe puntualizar que los referidos requerimientos se suman a la liquidación de la deuda expedida por administradora pensional e integran un título ejecutivo complejo, de manera que, por disposición legal, la obligación clara, expresa y exigible no consta en un único documento, *“sino que se acepta que dicho título puede estar constituido por varios que en conjunto demuestren la existencia de una obligación que se reviste de esas características. Así pues, la unidad del referido título es jurídica, mas no física”.* (STC 11406, del 27 de agosto de 2015)

En el sub lite se tiene que el despacho cognoscente libró mandamiento de pago en favor de la AFP accionante y en contra de la señora Claudia Patricia Ramírez Castellanos, por la suma de \$49.924.605, por concepto de aportes obligatorios al sistema e intereses moratorios que no fueron cancelados por la ejecutada, conforme al título ejecutivo N° 5628-16 del 25 de octubre de 2016.

En audiencia pública celebrada el pasado 13 de julio, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado ordenó la cesación de la ejecución y dispuso el archivo del proceso, tras concluir que se configuraba la inexistencia del título, al no acreditarse efectivamente que se hubiera notificado a la empleadora el requerimiento para la constitución en mora, conforme al artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, decisión que, a juicio de la Sala, resulta acertada, teniendo en cuenta el siguiente análisis:

En primer lugar, a folios 20 y 21, se glosa comunicación del 30 de agosto de 2016, dirigida a la señora Claudia Patricia Ramírez Castellanos, cuyo asunto lo es *“Requerimiento por Mora de Aportes Pensión Obligatoria –Previo a la demanda”*, requerimiento que fue remitido por la entidad ejecutada a la carrera 46 B 43 SUR 20 Ap 226 Envigado-Antioquia, con la correspondiente guía de entrega



por parte de la empresa de mensajería Domesa de Colombia S.A., evidenciándose sello de recibo por parte de “MILAN CONDOMINIO 4”

Ahora, atendiendo a la prueba de oficio decretada por el Juzgado, Protección S.A., allegó los formularios de vinculación de los señores Olmer Maya Valencia, John Francisco Zuluaga, Silvia Sánchez Tique y María Maril Patiño Ramírez, consúltase anexo 17 del expediente digital, documentos de los cuales se destaca, que las afiliaciones de la señora Silvia Sánchez Tique y el señor Olmer Maya Valencia, tuvieron lugar el 2 de agosto de 1996, en la ciudad de Armenia-Quindío, reportándose como empleador la señora Claudia Patricia Ramírez Castellanos, y como dirección del empleador la carrera 18 N° 20-47 Armenia-Quindío, dirección que resulta diferente a la informada por la ejecutada para la realización del requerimiento de constitución de mora.

Advierte la Sala, que si bien le asiste razón al apoderado recurrente al manifestar que pudo presentarse un cambio de domicilio, lo cierto es que esa situación no se encuentra acreditada en el plenario, reconociendo la propia entidad administradora, que no cuenta con un soporte documental que respalde o explique de donde se obtuvo la dirección a la cual fue remitido el requerimiento, limitándose a afirmar, que si la dirección estaba en la base de datos de la administradora es porque se suministró directamente por la empleador cuando adelantó alguna gestión de afiliación, afirmación que resulta insuficiente a efectos de darle validez a la comunicación del requerimiento, máxime cuando en el proceso, se acreditó que Protección S.A., remitió citación para notificación personal del auto que libró mandamiento de pago a la misma dirección donde se hizo el requerimiento, esto es, carrera 46 B 43 SUR 20 Ap 226 Envigado-Antioquia y esta fue devuelta por Servientrega, siendo la causal de devolución “*La persona no vive o labora allí*”, véase folio 87 del anexo 01 del expediente digital.

Bajo el anterior escenario no se demuestra el cumplimiento de los requerimientos legales para la constitución en mora, encontrando así configurada la inexistencia del título complejo.

En segundo lugar, advierte la Sala que Protección S.A., no aportó prueba alguna que acreditara el cumplimiento de las exigencias contempladas en el ya citado artículo 12 de la Resolución 2082 de 2016, esto es, no hay evidencia de que se hubieran desplegado las acciones persuasivas, consistentes en contactar al empleador dentro de los 15 días calendario siguientes a la constitución y firmeza del título ejecutivo, y posteriormente, dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha en que se realizó el primer contacto, razón por la cual, no resulta exigible por la vía ejecutiva la obligación que se persigue.

Consecuentemente, es procedente CONFIRMAR el auto recurrido.

Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A., por habérsele resuelto desfavorablemente el recurso de alzada interpuesto; se fija como agencias en derecho, en favor de la parte ejecutada, la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

### **3.- DECISION**

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,

#### **RESUELVE:**


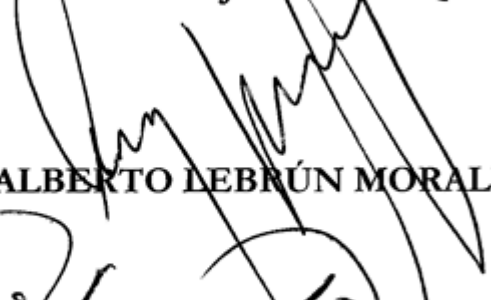

**PRIMERO:** Se **CONFIRMA** el auto proferido el 13 de julio de 2023, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por la ADMINISTRADORA DE FODNOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. en contra de la señora CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ CASTELLANOS.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A., se fija como agencias en derecho, la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

**TERCERO:** Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el numeral segundo del literal c) artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los Magistrados,

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No 136 fijado en la secretaria de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 8 de agosto de 2023.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario